

34ª REUNION — Continuación de la 19ª SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 26 Y 27 DE 1985

Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese,
Roberto Pascual Silva y Oscar Luján Fappiano

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ABDALA, Luis Oscar
ABDALA, Oscar Tupic
ACEVEDO de BIANCHI, Carmen B.
AGUILAR, Ramón Rosa
ALBARRACIN, Ignacio Arturo
ALIAS, Manuel
ALLEGRONE de FONTE, Norma
ALSOGARAY, Álvaro Carlos
ALTAMIRANO, Amado Héctor H.
ALVAREZ, Adrián Carlos
ALVAREZ, Roberto Pedro
ARABOLAZA, Marcelo Miguel
ARAOZ, Julio César
ARRECHEA, Ramón Rosaura
ARSÓN, Héctor Roberto
ASENSIO, Luis Asterio
AZCONA, Vicente Manuel
BAGLINI, Raúl Eduardo
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBARO, Julio
BARBEITO, Juan Carlos
BASUALDO, Héctor Alfredo
BECERRA, Carlos Armando
BELARRINAGA, Juan Bautista
BERNASCONI, Tulio Marón
BERRI, Ricardo Alejandro
BIANCHI, Carlos Humberto
BIELICKI, José
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, José Celestino
BODO, Rodolfo Luis
BONINO, Alberto Cecilio
BONOMI, Nora
BORDÓN GONZÁLEZ, José Octavio
BOTTA, Felipe Esteban
BRITO LIMA, Alberto
BRITOS, Oscar Felipe
BRIZ DE SANCHEZ, Onofre
BRIZUELA, Juan Arnaldo
BULACIO, Julio Segundo
CABELLO, Luis Victorino
CACERES, Luis Alberto
CAFERRI, Oscar Néstor
CAMISAR, Osvaldo
CAMPS, Alberto Germán
CANICOBIA, Ramón Héctor Pedro
CANTOR, Rubén
CAPUANO, Pedro José
CARDOZO, Ignacio Luis Rubén

CARMONA, Jorge
CARRANZA, Florencio
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASALE, Luis Santos
CASSIA, Antonio
CASTIELLA, Juan Carlos
CASTILLO, Miguel Ángel
CAVALLARI, Juan José
CAVALLARO, Antonio Gino
COLOMBO, Ricardo Miguel
CONNOLLY, Alfredo Jorge
CONTE, Augusto
COPELLO, Norberto Luis
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
CURATOLO, Atilio Arnold
CHAZARRETA, Pastor O. V.
CHEHIN, Jorge Victor
DALMAU, Héctor Horacio
DAUD, Ricardo
DE LA VEGA DE MALVASIO, Lily M.
DEBALLI, Héctor Gino
DÍAZ DE AGÜERO, Dolores
DÍAZ LECAM, Juan Antonio
DI CIO, Héctor
DIMASI, Julio Leonardo
DOMINGUEZ FERREYRA, Dardo N.
DONAIRES, Fernando
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
DOVENA, Miguel Dante
DRUETTA, Raúl Augusto
DUSSOL, Ramón Adolfo
ELIZALDE, Juan Francisco Carmelo
FALCIONI de BRAVO, Ivelise Iida
FAPPIANO, Oscar Luján
FEDERIK, Carlos Alberto
FERRÉ, Carlos Eduardo
FIGUEROA de TOLOZA, Emma
FINO, Torcuato Enrique
FURQUE, José Alberto
GARCIA, Antonio Matías
GARCIA, Carlos Euclides
GARCIA, Roberto Juan
GHIANO, Jorge Osvaldo
GIMÉNEZ, Jacinto
GINZO, Julio José Oscar
GÓMEZ MIRANDA, María Florentina
GONZÁLEZ, Arnaldo
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ, Jesús Jerónimo

GONZÁLEZ, Raúl Héctor
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás Walther
GONZÁLEZ PASTOR, Carlos María
GOROSTEGUI, José Ignacio
GOTI, Erasmo Alfredo
GRIMAU, Arturo Aníbal
GUATTI, Emilio Roberto
GUBIOLI, Mario Alberto
GUTIERREZ, Reynaldo Pastor
GUZMAN, María Cristina
HERRERA, Bernardo Eligio
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Hugo
IBÁÑEZ, Diego Sebastián
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
INGRAMO, Emilio Felipe
JALILE, José Félix
JAROSLAVSKY, César
JIMÉNEZ, Francisco Javier
KHOURY, Miguel Ángel
LANGAN, Roberto José
LAZCOZ, Hernaldo Efraín
LEALE, Zelmán Rubén
LENCINA, Luis Ascensión
LEPORI, Pedro Antonio
LESCANO, David
LESTANI, Carlos
LIPTAK, Teodoro
LÓPEZ, Santiago Marcellino
LUGONES, Horacio Enderio
MANNY, José Juan
MANZANO, José Luis
MANZUE, Alejandro
MARCHESINI, Víctor Carlos
MARTÍN, Belarmino Pedro
MARTINEZ, Valentín del Valle
MARTINEZ MARQUEZ, Miguel José
MARTINEZ MARTINOLI, Fausta G.
MASINI, César Francisco
MASTOLORENZO, Vicente
MATUS, Salvador León
MATZKIN, Jorge Rubén
MAYA, Héctor María
MEDINA, Alberto Fernando
MEDINA, Miguel Heraldito
MELÓN, Alberto Santos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MILANO, Raúl Mario
MINICHILLO, Juan José
MIRANDA, Julio Antonio
MONTEERRAT, Miguel Pedro

MONTERO, Carlos Lucio
 MORAGUES, Miguel José
 MOREAU, Leopoldo Raúl
 MOSSO, Alfredo Miguel
 MOTHE, Félix Justiniano
 NADAL, Marx José
 NEGRI, Arturo Jesús
 NIEVA, Próspero
 ORGAMBIDE, Luis Oscar
 PALEARI, Antonio
 PAPAGNO, Rogelio
 PATIÑO, Artemio Agustín
 PECHE, Abdol Carim Mahomed
 PEDRINI, Adam
 PELAEZ, Anselmo Vicente
 PEPE, Lorenzo
 PEREYRA, Pedro Armando
 PÉREZ, René
 PÉREZ VIDAL, Alfredo
 PERL, Néstor
 PINTOS, Carlos María Jesús
 PIUCILL, Hugo Diógenes
 PLANELL, Mariano Juan
 PONCE, Rodolfo Antonio
 PRADO, Leonardo Ramón
 PRONE, Alberto Josué
 PUGLIESE, Juan Carlos
 PUPILLO, Liborio
 PURITA, Domingo
 RABANAQUE, Raúl Octavio
 RAMOS, Daniel Omar
 RAPACINI, Rubén Abel
 RATKOVIC, Milivoj
 RAUBER, Cleto
 REALI, Raúl
 REYNOSO, Adolfo
 RIQUEZ, Félix

RIUTORT de FLORES, Olga Elena
 ROWERTO, Mario
 RODRÍGUEZ, Antonio Abel
 RODRÍGUEZ, Jesús
 RODRÍGUEZ, Manuel Alberto
 RODRÍGUEZ, Pedro Salvador
 RODRÍGUEZ ARTUSI, José Luis
 ROMANO, Domingo Alberto
 ROMERO, Antonio Elías
 ROMERO, Francisco Telmo
 RUBEO, Luis
 RUIZ, Ángel Horacio
 RUIZ, Osvaldo Cándido
 SABADINI, José Luis
 SAI DUNA, Bernardo Ignacio Ramón
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo
 SANCHEZ, Eduardo
 SANCHEZ TORANZO, Nicasio
 SARGUIS, Guillermo Carlos
 SARUBI, Pedro Alberto
 SCELZI, Carlos María
 SELLA, Orlando Enrique
 SERRALTA, Miguel Jorge
 SILVA, Roberto Pascual
 SILVERO, Lisandro Antonio
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
 SOCCHI, Hugo Alberto
 SOLARI BALLESTEROS, Alejandro
 SPINA, Carlos Guido
 SRIE, Miguel Antonio
 STAVALE, Juan Carlos
 STOLKINER, Jorge
 STORANI, Federico Teobaldo M.
 STUBBIN, Adolfo Luis
 STUBBIN, Marcelo
 SUAREZ, Lionel Armando
 TAIBO, Nicolás

TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
 TERRILE, Ricardo Alejandro
 TORRES, Carlos Martín
 TORRESAGASTI, Adolfo
 TOSI, Santiago
 UNAMUNO, Miguel
 URRIZA, Luis María
 VIDAL, Carlos Alfredo
 VISTALLI, Francisco José
 VON NIEDERHAUSEN, Norberto B.
 YAMAGUCHI, Jorge Rokuro
 ZAVALLEY, Jorge Hernán
 ZINGALE, Felipe
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, CON LICENCIA:

ALAGIA, Ricardo Alberto ¹
 AUSTERLITZ, Federico ¹
 CORTINA, Julio
 DE NICHILLO, Cayetano ¹
 FLORES, Aníbal Eulogio ¹
 GUELAR, Diego Ramiro ¹
 IMBELLONI, Norberto ¹
 LANDÍN, José Miguel ¹
 MAGLIETTI, Alberto Ramón ¹
 REGGERA, Esperanza ¹
 RIGATUSO, Tránsito
 ROBSON, Anthony
 VANOSSE, Jorge Reinaldo
 RESTOVICH, Francisco ¹

AUSENTE, CON AVISO:

CORPACCI, Sebastián Alejandro

¹ Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara.

SUMARIO

1. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se introducen modificaciones a la ley de impuesto sobre los capitales (97-P.E.-84). Se sanciona. (Pág. 6228.)
2. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se introducen modificaciones a la ley de impuesto sobre el patrimonio neto (101-P.E.-84). Se sanciona. (Pág. 6228.)
3. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece con carácter de emergencia un impuesto sobre los enriquecimientos patrimoniales obtenidos a título gratuito (1-P.E.-85). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 6238.)
4. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se introducen modificaciones a la ley de impuestos internos (100-P.E.-84). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 6255.)
5. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se introducen modificaciones a la ley 11.683 —texto ordenado en 1978— y sus modificatorias, relativa a la aplicación, percepción y fiscalización de los impuestos nacionales a cargo de la Dirección General Impositiva (28-P.E.-85). Se sanciona. (Página 6267.)
6. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el texto de la ley de impuesto al valor agregado —texto ordenado en 1977— y sus modificaciones (93-P.E.-84). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 6283.)
7. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de ley de los señores diputados Vidal y Rodríguez (J.) sobre creación y régimen legal del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (2.598-D.-85). Se sanciona. (Pág. 6335.)
8. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Agricultura y Ganadería, de Industria, de Educación, de Asistencia Social y Salud Pública, de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre régimen de política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes (26-S.-84). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 6345.)
9. Moción del señor diputado Cardozo de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento para formular una proposición con referencia al proyecto de ley en revisión sobre sustitución de los artículos 5º y 6º del Código Penal (ley 23.070) (77-S.-84). Es rechazada. (Pág. 6358.)

también puede ser que al conocer el proyecto formule alguna observación durante su tratamiento.

Sr. Stubrin (A. L.). — Si el señor presidente lo permite, creo que sería ilustrativo para el señor diputado Grimaux que se leyera solamente el artículo referido a las finalidades del fondo cuya creación se propone, ya que notaría que existe una total congruencia entre ellas y su propósito de promover la educación cooperativa. Con el financiamiento que se logra por medio de este fondo se puede afrontar la tarea pedagógica que propone el señor diputado. No existe contradicción entre las dos iniciativas, sino un alto grado de complementariedad.

Sr. Presidente (Pugliese). — Por Secretaría se dará lectura de los artículos 1º y 2º del proyecto.

Sr. Secretario (Béjar). — Dicen así:

—Se leen.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en particular el artículo 1º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º a 19.

—El artículo 20 es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Honorable Senado.

8

REGIMEN DE POLITICA INDIGENA Y APOYO A LAS COMUNIDADES ABORIGENES

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General, Agricultura y Ganadería, Industria, Educación, Asistencia Social y Salud Pública, Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre régimen de política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes.

Por Secretaría se dará lectura del dictamen.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación General, de Agricultura y Ganadería, de Industria, de Educación, de Asistencia Social y Salud Pública, de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre Régimen de Política Indígena y de apoyo a las comunidades aborígenes; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan aceptar los artículos 9º, 12, 18, 19 y 20, modificando los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24, así como también el título del capítulo III, quedando en consecuencia redactado en la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

LEY SOBRE POLITICA INDIGENA Y APOYO A LAS COMUNIDADES ABORIGENES

I — Objetivos

Artículo 1º — Declárase de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socio-económico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.

II — De las comunidades indígenas

Art. 2º — A los efectos de la presente ley reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país.

Se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad.

La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación.

Art. 3º — La inscripción será solicitada haciendo constar el nombre y domicilio de la comunidad, los miembros que la integran y su actividad principal, las pautas de su organización y los datos y antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento y los demás elementos que requiera la autoridad de aplicación. En base a ello, ésta otorgará o rechazará la inscripción, la que podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la determinaron.

Art. 4º — Las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones de las

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 6562.)

leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación vigente.

III — Del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

Art. 5º — Créase el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social. El Poder Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley. Contará con un consejo de coordinación y un consejo asesor.

1. El consejo de coordinación estará integrado por:

- a) Un representante del Ministerio del Interior;
- b) Un representante del Ministerio de Economía;
- c) Un representante del Ministerio de Trabajo;
- d) Un representante del Ministerio de Educación y Justicia;
- e) Representantes elegidos por las comunidades aborígenes cuyo número, requisitos y procedimiento electivo, determinará la reglamentación.

2. El consejo asesor estará integrado por:

- a) Un representante de la Secretaría de Acción Cooperativa;
- b) Un representante de la Secretaría de Comercio;
- c) Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria;
- d) Un representante de la Secretaría de Cultos;
- e) Un representante de la Comisión Nacional de Areas de Fronteras;
- f) Un representante por cada una de las provincias que adhieran a la presente ley.

Art. 6º — Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas:

- a) Actuar como organismo de aplicación de la presente ley, velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos;
- b) Dictar su reglamento funcional, normas de aplicación y proponer las que correspondan a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo;
- c) Llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites. Las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, relativas a la inscripción de las comunidades, así como a su cancelación, serán apelables ante la Cámara Federal del lugar dentro del plazo de diez (10) días;
- d) Elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud;
- e) Proponer el presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país.

IV — De la adjudicación de las tierras

Art. 7º — Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario, en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.

La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a aquienes los tengan precarios o provisorios.

Art. 8º — La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes de adjudicación y explotación de las tierras conforme a las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el particular, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia. Si fuese necesario, la autoridad de aplicación propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes necesarias.

Art. 9º — La adjudicación de tierras prevista se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de créditos preferenciales a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor explotación.

Art. 10. — Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades simultáneas. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de asesores que deberá tener en cuenta las costumbres la promoción de la organización de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos.

Art. 11. — Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales serán

previstas por la reglamentación de esta ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte años a contar de la fecha de su otorgamiento.

Art. 12. — Los adjudicatarios están obligados a:

- a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar;
 - b) No vender, arrendar a transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas, sin autorización de la autoridad de aplicación.
- Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados nulos a todos sus efectos;
- c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicación relativas al uso y explotación de las unidades adjudicadas.

Art. 13. — En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ella pasarán a la Nación o a la provincia según su caso. En este supuesto la reglamentación de la presente, establecerá el orden de prioridades para su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán en beneficio de la misma comunidad a que pertenecía.

V — De los planes de educación

Art. 14. — Es prioritaria la intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes que en la materia se implementen deberán resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborigen, asegurando al mismo tiempo su integración igualitaria en la sociedad nacional.

Art. 15. — Acorde con las modalidades de organización social previstas en el artículo cuarto de esta ley, los planes educativos y culturales también deberán:

- a) Enseñar las técnicas modernas para el cultivo de la tierra y la industrialización de sus productos y promover huertas y granjas escolares o comunitarias;
- b) Promover la organización de talleres-escuela para la preservación y difusión de técnicas artesanales; y,
- c) Enseñar la teoría y la práctica del cooperativismo.

Art. 16. — La enseñanza que se imparta en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas asegurará los contenidos curriculares previstos en los planes comunes y, además, en el nivel primario se adoptará una modalidad de trabajo consistente en dividir el nivel en dos ciclos: en los tres primeros años, la enseñanza se impartirá en la lengua indígena materna correspondiente y se desarrollará como materia especial el idioma nacional; en los restantes años, la enseñanza será bilingüe.

Se promoverá la formación y capacitación de docentes primarios bilingües, con especial énfasis en los aspectos antropológicos, lingüísticos y didácticos, como asimismo la preparación de textos y otros materiales, a través de la creación de centros y/o cursos especiales de nivel superior, destinados a estas actividades.

Los establecimientos primarios ubicados fuera de los lugares de asentamiento de las comunidades indígenas, donde asistan niños aborígenes (que sólo o predominantemente se expresen en lengua indígena) podrán adoptar la modalidad de trabajo prevista en el presente artículo.

Art. 17. — A fin de concretar los planes educativos y culturales para la promoción de las comunidades indígenas se implementarán las siguientes acciones:

- a) Campañas intensivas de alfabetización y post-alfabetización;
- b) Programas de compensación educacional;
- c) Creación de establecimientos de doble escolaridad con o sin albergue, con sistemas de alternancias u otras modalidades educativas, que contribuyan a evitar la deserción y a fortalecer la relación de los centros educativos con los grupos comunitarios; y
- d) Otros servicios educativos y culturales sistemáticos o asistemáticos que concreten una auténtica educación permanente.

La autoridad de aplicación promoverá la ejecución de planes educativos y culturales para las comunidades indígenas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, asesorará en la materia al ministerio respectivo y a los gobiernos provinciales y los asistirá en la supervisión de los establecimientos, oficiales y privados.

VI — De los planes de salud

Art. 18. — La autoridad de aplicación coordinará con los gobiernos de provincia la realización de planes intensivos de salud para las comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles para la atención de las comunidades dispersas. Se promoverá la formación de personal especializado para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas de radicación de las comunidades.

Art. 19. — Se declarará prioritario el diagnóstico y tratamiento mediante control periódico, de las enfermedades contagiosas, endémicas y pandémicas en toda el área de asentamiento de las comunidades indígenas. Dentro del plazo de sesenta días de promulgada la presente ley deberá realizarse un catastro sanitario de las diversas comunidades indígenas, arbitrándose los medios para la profilaxis de las enfermedades y la distribución en forma gratuita bajo control médico de los medicamentos necesarios.

Art. 20. — La autoridad de aplicación llevará a cabo planes de saneamiento ambiental, en especial para la provisión de agua potable, eliminación de instalaciones inadecuadas, fumigación y desinfección, campañas de eliminación de roedores e insectos y lo demás que sea necesario para asegurar condiciones higiénicas en los lugares de emplazamiento de las comunidades indígenas pro-

moviéndose, a ese efecto, la educación sanitaria de sus integrantes y el acceso a una vivienda digna.

Art. 21. — En los planes de salud para las comunidades indígenas deberá tenerse especialmente en cuenta:

- a) La atención bucodental;
- b) La realización de exámenes de laboratorio que complementen los exámenes clínicos;
- c) La realización de exámenes cardiovasculares, a fin de prevenir la mortalidad prematura;
- d) El cuidado especial del embarazo y parto y la atención de la madre y el niño;
- e) La creación de centros de educación alimentaria y demás medidas necesarias para asegurar a los indígenas una nutrición equilibrada y suficiente;
- f) El respeto por las pautas establecidas en las directivas de la Organización Mundial de la Salud, respecto de la medicina tradicional indígena integrando a los programas nacionales de salud a las personas que a nivel empírico realizan acciones de salud en áreas indígenas;
- g) La formación de promotores sanitarios aborígenes especializados en higiene preventiva y primeros auxilios.

Las medidas indicadas en este capítulo lo serán sin perjuicio de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con carácter general para todos los habitantes del país.

VII — De los derechos previsionales

Art. 22. — El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas elaborará y elevará al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que contemple el derecho a la jubilación ordinaria de este sector social.

La reglamentación de esta ley determinará un porcentual de pensiones no contributivas que beneficiará a los componentes de las comunidades indígenas que reúnan los recaudos establecidos por la ley 13.337.

VIII — De los planes de vivienda

Art. 23. — El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gestionará la habilitación de planes especiales para la construcción de viviendas, para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley, preferentemente con materiales, técnicas utilizadas por cada comunidad, mano de obra propia, del Banco Nación, el FONAVI y de cualquier otro plan habitacional de fomento.

IX — De los recursos

Art. 24. — Hasta la inclusión de las partidas pertinentes en el presupuesto general de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las reestructuraciones de créditos del presupuesto general de la administración nacional que fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de esta ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes o crear nuevas y reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 20 de septiembre de 1985.

Tomás W. González Cabañas. — Fausta G. Martínez Martinoli. — Carlos G. Spina. — Ricardo A. Terrile. — Ricardo A. Alagía. — Héctor G. Deballi. — Oscar L. Fappiano. — Torcuato E. Fino. — Miguel Unamuno. — Carlos E. García. — Carlos L. Montero. — Jorge L. Horta. — Osvaldo Camisar. — Milivoj Ratkovic. — Carlos M. Scelzi. — Rubén Cantor. — Cleto Rauber. — Luis A. Asensio. — Belarmino P. Martín. — Félix Riquez. — Raúl A. Carrizo. — Adolfo L. Stubrin. — Norma Allegrone de Fonte. — René Pérez. — José F. Jalile. — Juan J. Cavallari. — Angel H. Ruiz. — Arturo A. Grimaux. — Artemio A. Patiño. — Jorge R. Yamaguchi. — Próspero Nieva. — Dolores Díaz de Agüero. — Héctor M. Dalmau. — Emma Figueroa de Toloza. — Julio S. Bulacio.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Spina. — Señor presidente: la lucha de las comunidades aborígenes, que lleva más de cuatrocientos años, no merece una simple exposición dialéctica, porque lo que importa fundamentalmente en la tarde de hoy es que tenga sanción este proyecto de ley venido en revisión del Senado. En tal sentido, quiero afirmar que esta iniciativa no tiene nada que ver con un sentimiento de caridad ni de beneficencia, sino que se trata de una reparación histórica y de una reivindicación patrimonial y cultural.

La comisión que profundizó el tema tomó a su cargo el estudio de este proyecto en una subcomisión específica, y tuvo oportunidad de conversar con integrantes de las comunidades indígenas, con las agrupaciones que las representan e inclusive con aborígenes que se presentaron espontáneamente para brindar su opinión al respecto. Sin embargo, con un fin interpretativo, es importante señalar algunos conceptos fundamentales que fueron unánimemente sostenidos en la comisión.

Tratándose de un tema prenatal y supranacional en algunos casos, aunque fuera una causa justa y una bandera digna, la comisión consideró que al decir de Avellaneda "no hay nada en la Nación superior a la Nación misma". Asimismo, ella delimitó su cometido dentro de la esfera y del orden constitucional e institucional.

Para que esta ley fuera una normativa no ilusoria y con posibilidades prácticas de ser puesta en funcionamiento en forma inmediata, sin convertirse en un catálogo de ilusiones, afirmamos nuestra labor en el plano de la realidad.

Otro objetivo fundamental de la comisión fue el de tener en cuenta el sentido de integración social y no el de segregación o aislamiento.

Paso al análisis de las reformas introducidas por la comisión. En los artículos 1º, 3º inciso d), 7º y 13 se suprimió la expresión "tribu" en razón de que compartimos la observación formulada por los representantes de las comunidades en el sentido de que el uso común de ese vocablo lleva implícito un calificativo de primitivismo ofensivo para las poblaciones aborígenes. Por ello se lo substituyó por el concepto de "comunidad indígena".

Estimamos imprescindible la tipificación de la figura jurídica para definir con precisión a un grupo humano como un núcleo con derechos y obligaciones. Es necesario definir el alcance normativo de la figura creada porque en ella está implicada la voluntad del Estado, que va más allá del derecho privado.

En cuanto a la finalidad de la incorporación de la figura de la "comunidad indígena" es preciso señalar que se funda en un criterio de reparación histórica y de reivindicación patrimonial y cultural tendiente a la participación integrada en la Nación, descartando de plano toda interpretación que tienda al aislamiento o segregación del cuerpo jurídico institucional de la Nación y de la estructura política que norman la Constitución Nacional y las constituciones provinciales en sus jurisdicciones.

El artículo 4º responde a la necesidad de crear un sujeto soporte de los derechos y las obligaciones de la comunidad. La sanción del Honorable Senado limita la forma de organización exclusivamente a la de cooperativa.

La ley de cooperativas establece criterios valiosos —en especial su carácter no lucrativo—, pero también implica una serie de formalismos en la constitución de la cooperativa que el dictamen en consideración trata de planificar en el inciso c) del artículo 15, que forma parte del título referido a los planes de educación. La comisión ha flexibilizado el concepto para que cada comunidad adopte la forma jurídica que mejor se adapte a su realidad, ampliando los tipos legales a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación vigente.

En el artículo 5º se sustituye la denominación "Comisión Nacional de Asuntos Indígenas" por la de "Instituto Nacional de Asuntos Indígenas", por cuanto ésta es más comprensiva de las funciones y características del ente y resulta más representativa de una entidad descentralizada.

En ese mismo artículo se le da una nueva estructura a ese instituto que figura en la sanción del Honorable Senado con la designación de "Comisión", ya que se lo compone con un Consejo de Coordinación y un Consejo Asesor, en el primero de los cuales hay participación indígena.

En oportunidad del tratamiento en particular del artículo, propondremos la inclusión en el Consejo de Coordinación de la representación de las provincias que adhieran al proyecto de ley.

En el segundo párrafo del artículo 7º se agregan los términos "o provisorios", para contemplar las situaciones específicas de algunas provincias.

En el artículo 8º se suprimió la expresión "colonización", por cuanto este vocablo lastima la sensible piel del aborígen, quien asimila ese concepto con el de sometimiento por la fuerza, usurpación y despojo.

En el artículo 11 se agregaron las excepciones al principio de inefecución al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales, lo que será previsto por la reglamentación de la ley para permitir que dicho principio no perturbe la posibilidad de otorgamiento de créditos a las comunidades indígenas por parte de entidades oficiales.

También se suprime la obligación de inscribir los títulos como bien de familia, conforme a la ley 14.394 y concordantes. Esta supresión se funda en que se mezclan los criterios jurídicos de dominio de la ley con la figura del bien de familia, lo que crea problemas de doble registro y posible colisión de normas que se refieren a situaciones jurídicas diferentes. Hemos creído conveniente desvincular las normas que protegen la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas de aquellas dictadas por la ley 14.394, que nada agregan en este supuesto.

En cuanto a los planes de educación —artículos 14 a 17—, sin variar el texto aprobado por el Senado se lo ha adecuado a la legislación vigente en materia educativa.

En el artículo 22, al resultar inviable la redacción original, se la substituyó por otra, asignándole facultades al instituto para que estudie un régimen jubilatorio para las comunidades

indígenas; pero al mismo tiempo se dispuso que la reglamentación de la ley establecerá un porcentaje de pensiones graciables para atender las necesidades de las personas de edad en esas comunidades.

Por último, se adecuó la redacción del artículo 24 a las normas de las leyes de presupuesto.

De esta forma dejo brevemente fundamentado el dictamen que proponemos a la consideración de la Cámara.

Sólo deseo reiterar que este proyecto constituye un hito, un principio de reparación histórica, un inicio de la realización del valor justicia para estas comunidades. Por ello, creo que al aprobar el proyecto estaremos haciendo un acto de contrición de la conciencia histórica de los argentinos. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Perl. — Señor presidente: el señor diputado preopinante acaba de hacer el análisis exhaustivo de un proyecto que representa el comienzo del camino del pago de una deuda de larga data.

Esta iniciativa, que tuvo origen en un senador radical, fue discutida en esta Cámara en forma constructiva, intercambiando ideas con legisladores del bloque oficialista, particularmente con el señor diputado Spina. Por lo tanto, no puede dejar de recibir nuestro más fervoroso apoyo.

Hemos de aprobar en general este proyecto porque lo consideramos una justa reivindicación y el pago de aquella deuda a la que me he referido, luego de siglos de paciencia.

Como peronistas no es nuestro deber oponernos a toda iniciativa del partido oficialista sino sólo a aquellas que creemos equivocadas. Por ello, no nos avergüenza, sino todo lo contrario, aplaudir este tipo de iniciativa y tratar de enriquecerla con nuestro aporte.

Voy a hacer una muy breve mención de algunos hechos que marcan el sentido de esta reivindicación, porque aunque en esta Cámara ya hemos aprobado un proyecto de ley contra cualquier tipo de discriminación, debo decir que nuestra Carta Magna, en el inciso 15 del artículo que enuncia las atribuciones del Congreso, contiene una norma que en realidad es discriminatoria cuando en su parte final habla de promover la conversión de los indios al catolicismo.

A este respecto, en el Congreso General Constituyente de 1853 Seguí pedía explicaciones sobre el modo como se pensaba conservar ese

trato pacífico y los esfuerzos que se harían para atraerlos y civilizarlos, porque si ellos habían de ser ineficaces, él votaría su exterminio.

Debo decir con todo orgullo que cuando se trató la Constitución de 1949, el inciso 15 del artículo 68 se refería solamente a proveer la seguridad de las fronteras, y se explicaba la reforma diciendo que: “La modificación de este artículo consiste en eliminar la alusión al trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo, aspecto que hoy resulta anacrónico, por cuanto no se pueden establecer distinciones raciales, ni de ninguna clase, entre los habitantes del país”. Esto figura en el anteproyecto de reforma de la Constitución Nacional aprobado por el Consejo Superior del Partido Peronista el 6 de enero de 1949. Desgraciadamente, subsistió la norma cuestionada.

Podemos avanzar en el tiempo y referirnos al discurso que frente al Congreso pronunciara el general Julio A. Roca en 1884. Señaló entonces que: “No cruza un solo indio por las extensas pampas donde tenían sus asientos numerosas tribus (...) y el valor de las tierras sube en proporciones inesperadas”.

Evidentemente, esta expresión que acabo de leer nos permite cuestionar aquello de “Campaña del Desierto” y pensar que quizás el desierto vino después de la campaña.

Siguiendo adelante, en 1912 el presidente Roque Sáenz Peña se refería al indígena con esta expresión: “El indígena es un elemento inapreciable para ciertas industrias porque está aclimatado y supone la mano de obra barata...”.

Podríamos traer otras frases por el estilo, pero debemos pensar que nuestros hombres públicos alguna vez también pudieron haberse equivocado, aunque tuvieron aspectos muy positivos. De cualquier manera, considero que en esta sesión vamos a suplir parte de esas equivocaciones.

Vamos a aprobar este proyecto que, como dijera al comienzo de mi exposición, inicia el camino del pago de una deuda que nos menoscaba en nuestra integridad de hombres libres. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Dussol. — Señor presidente: este proyecto de ley de protección a los indígenas y apoyo a las comunidades aborígenes viene, sin duda alguna, a cubrir una necesidad impostergable que tenemos con todas las sufridas agrupaciones que pueblan desde sus orígenes nuestro territorio.

Es preciso destacar que si pretendemos fortalecer nuestro sistema democrático y marchar unidos hacia un destino de grandeza no podemos mantener nunca más postergados a quienes forman parte del origen de nuestra nacionalidad.

La provincia de donde provengo, el Chaco, está poblada por tobas, mocovíes y matacos y es sin duda una de las regiones más experimentadas en el tratamiento del aborigen. Casi desde sus inicios existe una Dirección Provincial del Aborigen que se ocupa de todo cuanto les compete. Este proyecto de ley incorpora aspectos esenciales para la reivindicación definitiva de estas comunidades, tales como la propiedad de la tierra trabajada, la educación y la salud, tópicos indispensables para una integración total de los aborígenes.

Es hora de remover los obstáculos que siempre impidieron a los indígenas alcanzar la igualdad plena a que tienen derecho, atendiendo sus legítimos reclamos. Ese es nuestro deber como legisladores, para que ellos no sigan padeciendo las injusticias de la marginación a que fueron sometidos durante mucho tiempo.

Son innumerables las consideraciones que se pueden hacer y he solicitado la palabra porque estimo que en el tiempo que nos toca vivir, tiempo de reencuentro en esta Nación, resulta importante nuestro aporte y nuestro esfuerzo para la sanción de este proyecto que va a dignificar a los aborígenes, integrándolos organizadamente a la Nación y preservando su propia cultura.

Tal vez el proyecto no sea absolutamente perfecto, pero esta iniciativa de un senador de plasmar por medio de esta ley la reivindicación de los aborígenes de la República Argentina, está dando muestras de que el proceso democrático que se puso en marcha el 30 de octubre de 1983 procura hallar el rumbo definitivo para esta República, con la integración de los aborígenes, que son la cultura y que quizás son el destino de esta República. Todos nos sentimos enorgullecidos y principalmente quien habla, porque conoce los padecimientos de las sufridas comunidades que habitan su provincia.

Por todo lo señalado, adelanto el voto favorable para este proyecto. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese).— Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. González Cabañas.— Señor presidente: al considerarse este importante proyecto para nuestra comunidad nacional en la Comisión de Legislación General, se trabajó exhaustivamente sobre la base de algo que quiero recalcar: el concepto de nación.

Una nación es el producto de su historia, de su presente y de su futuro. Es el producto de sus sentimientos y espiritualidades; la idea es construir un objetivo común. Por lo tanto, nuestra Nación no puede rechazar su propia historia; no puede negar que fue construida por hombres que la fundaron bajo el signo del cristianismo, quienes participaron no sólo en la colonización sino también en las luchas por la independencia y por la liberación nacional.

En ese contexto, nuestra vieja Constitución de 1853 receptó normas inspiradas en esa filosofía; por ejemplo, que el presidente tiene que ser católico, que los indios deben convertirse al catolicismo, etcétera.

Pero eso era producto de nuestra historia, a tal punto que los justicialistas pudimos modificar y adaptar esos conceptos en nuestra Constitución de 1949, impregnándola del amplio sentido que tiene nuestro pasado, pero sin renegar de él y tampoco de nuestra nacionalidad, porque lo nacional tiene un origen y un futuro.

Es decir que hemos coincidido en ese concepto de comunidad. ¡Y qué lindo es coincidir así con otros argentinos que también piensan que la Nación debe construirse sobre esos valores espirituales!

Esta es la razón de la unanimidad: fueron rechazados todos los conceptos materiales. Por eso los justicialistas planteamos muchas veces la diferencia existente entre ambos conceptos, ya que entendemos que quienes preconizan la primacía de los valores materiales son aquellos que quieren sojuzgar a nuestra Nación. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Conte.— Señor presidente: la Cámara asiste al tratamiento de este proyecto con la emoción que significa tomar conciencia de que estamos dando uno de los pasos más importantes de estos dos últimos años.

Estamos intentando reparar todo lo que en las últimas décadas se hizo en contra de quienes nos precedieron y fundaron nuestra civilización. Ayer el despojo y el genocidio, que aún nuestros libros de historia siguen llamando expediciones al desierto. Hoy, la marginación, la lucha por las tierras, el alambrado que se corre, la salud que falta, el uso de una mano de obra barata y —¡cuántas veces!— el empleo de la comunidad aborigen como carne de cañón desde el punto de vista político.

Ciertamente, en las presentes circunstancias esta Cámara no puede tratar más a fondo esta cuestión, ni las condiciones permiten lograr la modificación de este proyecto de ley; pero como bien se ha dicho con respecto a la impor-

tante iniciativa del senador de la Rúa y en relación con el trabajo cuidadoso realizado por el diputado Spina, debemos tener conciencia de que solamente estamos empezando a tirar una pelota hacia adelante y que quedan muchas cosas sin resolver. Que no se confunda este concepto de la comunidad aborígen con la exigencia de que esa comunidad adopte otra forma jurídica. Sepamos de una buena vez respetar los valores comunitarios con los que se organizan las comunidades aborígenes, que son valores de raíz cristiana. Que se sepa atender el problema de sus tierras, entendiendo que nadie será movido de las que actualmente ocupa; y si las tierras fiscales no alcanzan, utilizaremos las tierras contiguas, de modo de no tener que empujar a una comunidad aborígen fuera de su zona. En este régimen legal está faltando declarar de utilidad pública todas las tierras privadas que ocupan las comunidades aborígenes; de este modo, con un simple decreto, sentaríamos las bases de acción futura en beneficio de estas comunidades.

Finalmente, dos exigencias. En primer lugar, es necesario que de una buena vez nuestra niñez y nuestra juventud empiecen a tener una nueva valoración frente a esta realidad indígena, como fruto de la educación pública. En segundo lugar, es preciso dar a estos compatriotas una solución previsional de manera inmediata, y lamentamos no haberlo podido hacer ahora. Todo esto queda en manos de quienes van a llevar adelante esta acción.

En esta nueva organización estarán representadas todas las comunidades aborígenes, y espero que esas representaciones auténticas nos impulsen a dar cumplimiento a estos históricos requerimientos. ¡Ojalá sepamos hacer frente a este desafío! (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rabanaque. — Señor presidente: un grupo de jóvenes de mi partido —con la fe y el entusiasmo propios de esa época de la vida— ha estudiado intensamente el proyecto en consideración y me ha hecho llegar un trabajo en el que fundamentan el apoyo a la iniciativa. Quizás debido a la inexperiencia política o a la falta de familiaridad con los procedimientos de esta Cámara dicho trabajo ha resultado muy extenso como para ser leído, por lo que voy a pedir su inserción en el Diario de Sesiones.

Pero sí tengo la intención de decir brevemente algunas cosas. Quiero agradecer al señor diputado Spina —tengo la obligación de hacerlo— porque recibió a ese grupo de jóvenes, los es-

cuchó, trabajó con ellos e incluso aceptó de muy buena gana una serie de opiniones que motivaron inclusiones en este proyecto.

Además deseo señalar que con esta iniciativa se lleva a cabo una reparación histórica en la cuestión del aborígen. Para mí esto es motivo de felicidad por el proyecto en sí y por el hecho de que haya sido un senador de la Capital Federal —un porteño— el que originara y promoviera la iniciativa. Digo esto porque a pesar de su origen cordobés actúa desde hace muchísimos años en la Capital Federal. Además, históricamente el puerto de Buenos Aires ha explotado al interior del país y por ello es que entiendo que con este proyecto se concreta una doble reparación histórica. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Gutiérrez. — Señor presidente: toca hoy a esta Honorable Cámara aprobar un proyecto que viene a poner justicia y a reparar el marginamiento y el olvido en que vivieron las razas aborígenes de nuestro pueblo. Sin lugar a dudas esta ley será recibida con alborozo en todo el país, especialmente en las provincias que tienen numerosas agrupaciones indígenas. Por ejemplo, en Formosa las agrupaciones aborígenes reúnen a más de 40.000 almas.

Desde la conquista del desierto, en el sur argentino las agrupaciones indígenas fueron acorraladas en los contrafuertes cordilleranos, en los pedregales y en las zonas más inhóspitas y han sobrevivido merced a su capacidad para afrontar las inclemencias de esas regiones.

En algunas zonas, como en el norte del Neuquén, las agrupaciones indígenas sólo quedaron con la punta de los cerros nevados para que allí trabajaran sus tierras. En cambio, los grandes estancieros recibieron, como compensación por su aporte a la conquista, los valles y las mejores tierras productivas, que luego fueron alambradas.

Por ello es que esta ley, que acuerda en propiedad la tierra a las agrupaciones indígenas y las convierte en personas jurídicas con capacidad para adquirir bienes y contraer obligaciones, pone a los aborígenes en igualdad de condiciones con el resto del pueblo argentino.

Por otra parte, se establece que habrán de conservar sus pautas culturales, su religión y su lengua. De esa manera, al integrarse, esa cultura milenaria enriquecerá la cultura del pueblo argentino.

Se trata de un proyecto con espíritu de solidaridad para los pueblos mapuche, mataco y para todas las agrupaciones aborígenes del país.

A lo largo de los años que llevo en la Patagonia he seguido de cerca el sufrimiento y el marginamiento de que han sido objeto estos pueblos indígenas y advierto que hasta el momento los esfuerzos que se hicieron no permitieron revertir totalmente la situación. Por eso felicito a los señores legisladores que iniciaron y elaboraron el proyecto y a los que lo mejoraron hasta convertirlo en la iniciativa que será aprobada por esta Honorable Cámara. Reiteramos, pues, nuestro más ferviente apoyo a las comunidades aborígenes del país. (*Aplausos*.)

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Perl. — Señor presidente: propongo que se efectúe el siguiente agregado al artículo 1º. A partir de la frase “declárase de interés nacional” solicito la incorporación del siguiente párrafo: “... como acto de reparación histórica y de restitución patrimonial...” Considero que estas palabras contienen un sentido espiritual que está de acuerdo con todas las expresiones vertidas en este recinto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Spina. — Señor presidente: vamos a mantener el texto del artículo 1º tal como está redactado. En la fundamentación esgrimida por todos los señores legisladores se ha reiterado el concepto de reparación histórica y restitución patrimonial. La buena técnica legislativa indica que no es conveniente incorporar párrafos con sentido declarativo en una ley, que debe tener carácter normativo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Conte. — Señor presidente: desde el inicio del tratamiento del tema ya había percibido que la comisión no estaba dispuesta a reconsiderar esta iniciativa y, eventualmente, a aceptar modificaciones al proyecto de ley.

No habiendo podido presentar hoy en Mesa de Entradas una disidencia respecto de esta norma —aunque reglamentariamente considero que correspondía su aceptación—, voy a solicitar que se inserte en el Diario de Sesiones la presentación que había elaborado y que contiene una serie de modificaciones al proyecto. Mi intención es no demorar a la Cámara en una discusión que sería inútil.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Gutiérrez. — Señor presidente: considero que el artículo 1º debe mantenerse tal como ha sido redactado, ya que el concepto de reparación histórica está implícito en todo el contexto del proyecto. La iniciativa fue fundamentada en su momento por el señor senador De la Rúa. Además, en su elaboración han intervenido profesionales de origen indígena, que se han capacitado y que han trabajado en la Confederación Indígena de la República Argentina para hacer posible este proyecto de ley. La norma ha sido analizada artículo por artículo y se ha mantenido un diálogo permanente con quienes integraron la comisión que redactó el despacho.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 1º tal cual está redactado en el dictamen de las comisiones.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º a 4º.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 5º.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Spina. — Señor presidente: en la primera parte, donde dice: “El Consejo de Coordinación estará integrado por”, propongo que se agregue un inciso f) que diga: “Un representante por cada una de las provincias que adhieran a la presente ley”. A su vez solicito que en la segunda parte, donde dice: “El Consejo Asesor estará integrado por”, se elimine el inciso f).

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 5º con la modificación propuesta por el señor miembro informante de la comisión.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Perl. — Sobre el particular he hablado con el diputado Spina y estuve de acuerdo, pero tomando el asunto dentro de un contexto más global se observa que este artículo establece dos consejos que son monstruosos en cuanto a la cantidad de sus miembros. Así, en el proyecto figuran cinco representantes del Consejo de Coordinación y seis para el Consejo Asesor. Considerando que es muy difícil que esto funcione bien en la práctica, yo planteé una modificación a este artículo en su última parte estableciendo sólo un consejo de coordinación que se integrará de la siguiente manera: “a) Un representante por cada una de las provincias que adhieran a la presente ley; b) Representantes elegidos por las comunidades aborígenes cuyo número, requisitos y procedimiento electivo determinará la reglamentación.

“El presidente del Instituto podrá crear comisiones ejecutivas para proyectar y cumplir cuestiones específicas relativas a la presente ley, las cuales se integrarán con miembros de la comunidad recurrente y los representantes de las áreas de gobierno que afectare el tema a resolver”.

Es decir que se crearían comisiones ad hoc cada vez que fuera necesario tratar un tema específico y no estas comisiones con carácter permanente que desde ya pienso —ojalá me equivoque— resultarán ineficaces.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Spina. — Mantenemos la redacción con la corrección efectuada por cuanto el texto vuelve a tomar la constitución de este consejo como estaba presentada originariamente, es decir en el proyecto inicial, a lo cual agregamos la representación aborígen en el organismo coordinador. El organismo asesor lo mantenemos porque así lo establecía el despacho del Senado y de ese modo lo habían solicitado reiteradamente las comunidades aborígenes mediante comunicaciones remitidas a la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Gutiérrez. — Propongo a la comisión la eliminación del representante del Ministerio de Trabajo, porque las comunidades indígenas ya tienen representación en el Consejo y también están representados los demás organismos que específicamente deben atender la implementación de los proyectos para la promoción de aquéllas.

Por otra parte, las leyes laborales prevén la existencia de una delegación en cada provincia o ciudad importante, en donde los aborígenes son atendidos sin discriminación alguna. Es decir que ellos se hallan protegidos por la legislación laboral; por ese motivo considero que no es necesario incluir un representante del Ministerio de Trabajo en el Consejo de Coordinación. Además, cuando más amplios sean esos organismos más difícil resultará coordinar su acción.

Por las razones expuestas propongo la eliminación del representante del Ministerio de Trabajo, sin que esto implique en manera alguna un rechazo a la actuación de ese ministerio. Pienso que eso tornará más ejecutivo al Consejo de Coordinación.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Spina. — Señor presidente: la comisión va a mantener la representación del Ministerio de Trabajo en razón de que la República Argentina

ha suscrito el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a la integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones en los países independientes. Ese convenio otorga especial preferencia a la regulación del trabajo de las comunidades indígenas en el sentido de que ello debe ser una preocupación de los gobiernos nacionales.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 5º con la modificación propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 6º.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 7º.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Perl. — Señor presidente: propongo la siguiente redacción para el artículo que estamos considerando: “Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso de ser insuficientes, en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que, total o parcialmente, carezcan de tierras; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.

“La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios.

“En cada caso el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas declarará la afectación al dominio público de las tierras necesarias a los fines indicados en el primer párrafo del presente artículo, y establecerá los juicios de expropiación correspondientes, pudiendo celebrar arreglos extrajudiciales con los propietarios para la adquisición directa de esos bienes”.

Considero que de nada vale la bien intencionada letra de la ley si no tiene una posibilidad concreta de aplicación. En ese sentido, esta modificación se basa en el decreto ley 505/58, que establece como atribuciones de Vialidad Nacional lo mismo que aquí se está refiriendo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Spina. — La mayoría de la comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado Perl por cuanto perfecciona el sentido del proyecto...

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿En toda su extensión?

Sr. Spina. — No; sólo en cuanto al último agregado. El resto del texto se mantiene en la versión aprobada por la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — A los efectos de clarificar el tema, la Presidencia solicita que el señor diputado Perl le haga llegar el texto completo de la modificación.

Sr. Perl. — Con mucho gusto, señor presidente.

Sr. Conte. — Pido la palabra para sugerir un pequeño agregado más a la redacción.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Conte. — Señor presidente: me alegra que efectivamente nos hayamos puesto a trabajar en serio en este proyecto. Apoyo desde ya la propuesta de mi colega el diputado Perl, pero deseo solicitar que a continuación de la palabra "desarrollo" se introduzca el siguiente párrafo: "Los cambios de asentamiento sólo podrán realizarse con el consentimiento de la comunidad y de la autoridad de aplicación".

Sr. Presidente (Pugliese). — Por Secretaría se dará lectura del texto del artículo 7º con la modificación propuesta por el señor diputado Perl. Posteriormente se pondrá en consideración la modificación propuesta por el señor diputado Conte.

Sr. Secretario (Béjar). — El artículo 7º propuesto dice así:

Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso de ser insuficientes, en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que, total o parcialmente, carezcan de tierras; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.

La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios.

En cada caso el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas declarará la afectación al dominio público de las tierras necesarias a los fines indicados en el primer párrafo del presente artículo, y establecerá los juicios de expropiación correspondientes, pudiendo celebrar arreglos extrajudiciales con los propietarios para la adquisición directa de esos bienes.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia solicita que el señor diputado Conte lea nuevamente la modificación que propuso a fin de ponerla en consideración.

Sr. Conte. — Propongo que a continuación de la palabra "desarrollo" se introduzca un breve párrafo que diga así: "Los cambios de asentamiento sólo podrán realizarse con el consentimiento de la comunidad y de la autoridad de aplicación".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿El resto del artículo coincide con la propuesta del señor diputado Perl?

Sr. Conte. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Spina. — Señor presidente: al analizar con mayor profundidad y escuchar más integralmente las propuestas del señor diputado Perl y del señor diputado Conte, estimo que requerirían un mayor estudio porque podrían variar conceptos fundamentales de la iniciativa.

Por lo tanto, en nombre de la mayoría de la comisión voy a insistir en la redacción original que contiene el proyecto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.

Sr. Gutiérrez. — Señor presidente: juzgo importante el agregado que propone el señor diputado Conte en el sentido de que el desplazamiento de un lugar a otro —que puede ser realizado para mejorar las condiciones de tenencia de la tierra— debe contar con el consentimiento de las agrupaciones, ya que en más de una oportunidad ha sucedido que para mejorar la situación de los aborígenes se disponen traslados que ellos no aceptan.

Para los indígenas el lugar en que viven, su tierra, es algo que conservan como un legado divino y por lo tanto debe ser respetado el amor que ellos tienen al sitio en que habitan, donde han nacido sus hijos y realizan sus ritos religiosos. Insisto en que para ellos la tierra tiene un origen divino y por ello debe respetarse la voluntad de las agrupaciones.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Dalmau. — Señor presidente: si mal no entendí, las últimas expresiones del señor diputado Spina han dado por tierra con las modificaciones propuestas por el señor diputado Perl.

Sr. Presidente (Pugliese). — En efecto, señor diputado.

Sr. Dalmau. — Si tampoco entendí mal, en un primer momento el señor diputado Spina había coincidido con la propuesta del señor diputado

Perl, pero al disentir de la del señor diputado Conte se aferró a la letra original del proyecto.

Los justicialistas creemos que debemos defender la posición del señor diputado Perl en virtud de que la comunidad de los hermanos indígenas debe tener la posibilidad de acceder a la tierra, y pareciera ser que en este país al hombre blanco le cuesta dar la tierra al hermano que es dueño ancestral de ella.

Todo esto me trae a la memoria un hecho: en mi provincia, Misiones, se da una circunstancia muy especial: convivo muy cerca de las comunidades indígenas de Frakrán y Perutí y debo decir que están extraordinariamente organizadas. En esa región son los naturales quienes dan trabajo a los hermanos blancos indigentes, porque se han estructurado de tal manera que cuentan con aserradero, criadero y peladero de pollos y una cantidad de elementos que han hecho que en verdad el indígena supere al blanco. Esto es algo que no se conoce y que en realidad constituye el revés de la historia.

Cuando poseen tierras los indígenas se organizan de una forma que resulta beneficiosa para todo el país. Por lo tanto, así como en muchos lugares se constituyen reservas naturales y parques nacionales de cincuenta mil o sesenta mil hectáreas para preservar la flora y la fauna, de la misma manera deben reservarse tierras para los indígenas.

Por eso es que los justicialistas adherimos a la redacción propuesta por el señor diputado Perl y solicitamos que la comisión no cambie de criterio en cuanto a su aceptación.

Sr. Elizalde. — No sea demagogo, señor diputado.

Sr. Dalmau. — Si vivir treinta años al lado de los indios es ser demagogo, yo lo soy, señor diputado.

Sr. Elizalde. — ¿Por qué no dio el quórum para tratar los proyectos?

Sr. Dalmau. — Lo estamos dando ahora.

Sr. Presidente (Pugliese). — Ruego a los señores diputados no dialogar.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Deballi. — Quiero ratificar, como miembro de la comisión, lo expuesto por el señor diputado Spina, sobre todo con relación a la última parte de la propuesta del señor diputado Conte.

Aquí estamos considerando los derechos de ciudadanos argentinos y la Constitución Nacional incluye entre ellos la libertad de tránsito o para radicarse en cualquier lugar del territorio de la Nación, sin ninguna clase de trabas. So-

meter el traslado a la consideración de cualquier autoridad importa una reglamentación inconstitucional.

Por ello solicito la aprobación del artículo tal cual figura en el dictamen de la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Conte. — Señor presidente: creo que ambas propuestas son igualmente importantes, pero de cualquier modo, como lo que más me preocupa es la concreción de un plan de entrega de las tierras, no tengo inconvenientes en retirar mi moción si ello facilita la aprobación de la propuesta del señor diputado Perl.

Sr. Presidente (Pugliese). — La comisión no ha aceptado ninguna modificación. Lo hizo en primera instancia con la propuesta del señor diputado por Chubut, pero luego retiró su aceptación.

Se va a votar el artículo 7º del despacho de las comisiones.

—Resultado afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 8º.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Perl. — Pido disculpas a la Presidencia, pero cuando pedí la palabra al ponerse en consideración el artículo 8º no funcionó el micrófono, por lo cual no fui advertido.

Solicito entonces la reconsideración del artículo 8º para proponer un agregado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por Chubut. Se requieren dos tercios de votos.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Está nuevamente en consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Perl. — En este artículo se hace referencia a tierras fiscales de propiedad de la Nación y también se dice: "Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial...". Sugiero que se agreguen aquí los términos "y comunal", ya que sabemos que dentro de los ejidos comunales existen tierras que cumplen con los objetivos del artículo. Además, cuando dice "...o

su adjudicación directa por el gobierno de la provincia", debería agregarse "o en su caso, el municipal".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Spina. — Señor presidente: quisiera una aclaración al respecto. ¿Ese agregado "y comunal" significa que el municipio podrá ejercitar acciones expropiatorias?

Sr. Presidente (Pugliese). — El texto dice, según la propuesta del señor diputado: "...se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial y comunal para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia o en su caso, el municipal".

Sr. Spina. — La comisión entiende que corresponde el agregado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 8º, con las modificaciones propuestas por el señor diputado Perl y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 9º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 10.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 11.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Conte. — Señor presidente: aunque quizá por razones de estricta técnica jurídica lo que voy a proponer podría ubicarse en este artículo o en otro —no tiene mayor importancia donde se ubique—, planteo la posibilidad de que este artículo diga lo siguiente: "Suspéndense en todo el país, a partir de la fecha de la sanción de la presente ley y hasta tanto se resuelva el asentamiento definitivo, todos los juicios de desalojo seguidos contra las comunidades aborígenes o sus integrantes respecto de las tierras donde se encontraren, cualquiera sea la etapa procesal del trámite, así como los procedimientos de ejecución de sentencia y aunque mediaren, homologados o no, acuerdos de partes". (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿La comisión acepta?

Sr. Spina. — Entiendo que la proposición del señor diputado Conte se refiere a un proyecto diferente, que cuenta con sanción del Senado y que será tratado por cuanto figura en el plan de labor.

El proyecto que estamos considerando aparece como ley de política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes y se origina en el expediente 26-S.-84. Por otra parte, el expediente 32-S.-85 contiene también un proyecto de ley en revisión que se refiere a la suspensión de los desalojos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 11 tal como figura en el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 12.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 13.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Perl. — Señor presidente: para ser consecuentes con el artículo 8º, propongo que donde dice "...pasarán a la Nación o a la provincia...", se exprese: "...pasarán a la Nación o a la provincia o al municipio...".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Stubrin (A. L.). — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 13 con la modificación propuesta por el señor diputado por Chubut y aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se aprueban los artículos 14 a 16.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 17.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Perl. — Señor presidente: teniendo en cuenta que durante el transcurso del período ordinario del año pasado presenté un proyecto relacionado con la enseñanza de la cultura aborigen nacional en nuestras escuelas, y con la idea de enriquecernos con el conocimiento que podamos adquirir de ella, ya que es importante como aporte a nuestra identidad nacional, quiero agregar como inciso e) el siguiente: "Se promoverán las expresiones culturales de los pueblos indígenas a cuyo fin se considerará prioritariamente la adjudicación de espacios en estaciones de radio y televisión, facilitándoseles la edición de diarios, revistas y otros medios de comunicación, como también la obtención de créditos, subsidios, becas y otros estímulos para lograr los objetivos expresados".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Stubrin (A. L.). — La mayoría de la comisión no acepta porque entiende que la especificidad de este proyecto no permite la inclusión de cuestiones que alteren su sistemática.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 17 tal cual fuera redactado por la comisión.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 18 a 24.

— El artículo 25 es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley¹. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Se comunicará al Honorable Senado.

Se va a votar si se efectúan en el Diario de Sesiones las inserciones que solicitaran los señores diputados Conte y Rabanaque.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se harán las inserciones solicitadas².

9

MOCION

Sr. Cardozo. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Cardozo. — Señor presidente: quiero plantear la posibilidad de apartarnos del reglamento para solicitar la inclusión en el orden del día de la sesión de mañana de un tema que para nosotros reviste gran importancia y trascendencia. En efecto, deseamos que mañana este cuerpo trate la llamada ley Nápoli, y en orden a poder plantear tal moción es que pedimos que la Cámara resuelva apartarse del reglamento.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Nuestro bloque no va a apoyar la moción del señor diputado Cardozo, sorpresivamente planteada, para apartarnos del reglamento.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar si la Cámara se aparta del reglamento. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

— Resulta negativa.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 6566.)

² Véase el texto de las inserciones en el Apéndice. (Páginas 6585 y 6587.)

10

CONGELAMIENTO DE TARIFAS DE HOTELES Y PENSIONES

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Vivienda en el proyecto de ley del señor diputado Rubeo por el que se congelan a partir del 1º de junio de 1985 las tarifas de los hoteles y pensiones que no cuentan con la habilitación definitiva.

Por Secretaría se dará lectura del dictamen.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación General y de Vivienda han considerado el proyecto de ley del señor diputado Rubeo sobre régimen legal por el cual se congelan a partir del 1º de junio de 1985 y por el tiempo que dure el congelamiento de salarios el monto de las tarifas aplicadas por los hoteles y pensiones que no cuentan con la habilitación definitiva otorgada por autoridad competente; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Se congelan, a partir del 1º de junio de 1985, y por todo el tiempo que dure el congelamiento de salarios dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional, el monto de las tarifas aplicadas por los hoteles y pensiones que no cuenten con habilitación definitiva otorgada por autoridad competente.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 20 de septiembre de 1985.

Carlos E. García. — Héctor G. Deballi. — Néstor Perl. — Miguel Unamuno. — Carlos L. Montero. — Héctor M. Maya. — Miguel P. Monserrat. — Torcuato E. Fino. — Lorenzo A. Pepe.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación General y de Vivienda al considerar el proyecto de ley del señor diputado Rubeo sobre régimen legal por el que se congelan a partir del 1º de junio de 1985 el monto de las tarifas aplicadas por los hoteles y pensiones que no cuentan con la habilitación definitiva otorgada por autoridad competente, creen innecesario abundar en más detalles que los enunciados en sus fundamentos, por lo que los hacen suyos y así lo declaran.

Carlos E. García.